



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL
Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101
Edificio Barcelona
Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573
e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com
jcg.asesorjuridico@gmail.com

Popayán, octubre de 2020

JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE POPAYAN

Fecha: 20 de octubre de 2020

Recibido por:

Daniela Bravo Ortega
Secretaria

Doctora:

MARITZA GALINDEZ LÓPEZ

JUEZ NOVENA ADMINISTRATIVA DEL CIRCUITO DE POPAYÁN CAUCA.

Ciudad

Medio control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: LUZ MILA DORADO GOMEZ Y OTROS.
Demandados: NACION, INVIAS y OTROS.
Expediente: 2018-00331-00.

JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía N°14.889.980 de Buga V. portador de la tarjeta profesional N°68.937 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial de LEASING BANCOLOMBIA hoy **BANCOLOMBIA S.A.** la cual absorbió por fusión a la antes mencionada, quedando en una sola compañía, conforme se autorizó por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución S.F.C. No 1171 del 16 de septiembre de 2016, protocolizada mediante escritura pública 1124 del 30 de septiembre de 2016 Notaria 14 de Medellín, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, de manera respetuosa, por medio del presente escrito, estando dentro del término legal, procedo a contestar la Demanda en los siguientes términos:

A LOS HECHOS.

HECHO PRIMERO: NO ME CONSTA.

Pero de la lectura de la demanda, y demás piezas procesales, debemos predicar que **NO ES CIERTO** lo predicado en la demanda. En lo concerniente a la producción real del accidente, en el entendido que la maniobra desplegada por el señor Andrés Felipe Ortega, no se puede considerar como una maniobra irresponsable ni negligente, sino que obedece a una propia del sistema vial existente y una maniobra necesaria para el caso particular donde intervienen factores físicos que indefectiblemente marcaron la ocurrencia del hecho gestor.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

Por lo anterior, entramos a hacer el análisis del planteamiento, en primer lugar, conforme a las pruebas obrantes en el proceso; encontramos que en lugar de los hechos la VÍA PANAMERICANA comporta dos carriles unidos con doble sentido, sin bermas adicionales o ampliaciones y que siguen el mínimo vial para este tipo de vías, situación determinante en las decisiones en la hipótesis que determina la posible invasión del carril de contra flujo. Aunado a lo dicho, las características de extensión del tractocamión, impiden abiertamente evitar que la parte posterior del tráiler en procesos de giro en el sistema vial montañoso y de curvas o sinuosidades de las vías que son a uso de carriles construidos a doble vía sin separador, hagan que se tomó frontal en carril una curva pero por cinética y física la parte posterior pueda ingresar a carril contrario.

De lo dicho vemos que la maniobra desarrollada por el señor Andrés Felipe no se constituye como una maniobra de negligencia ni descuido, sino por el contrario es una maniobra que determina obligatoria ejecución en el entendido que por las características de la vía y el vehículo deben hacer y en ese sector fácilmente se puede evidenciar que es una conducta frecuente y propia necesaria de la conducción normal que concurre en la vía.

Adicionalmente, encontramos disparidad en la afirmación contenida en el hecho que manifiesta que el tracto camión colisionó a la moto, entendiendo esto que fue la moto quien golpeó de frente el tráiler del camión, en situaciones que como las anteriores entraremos a analizar.

Si bien es cierto el tráiler del tracto camión se encontraba con parte de su extensión en parte del carril contrario debido a la maniobra que como fue explicada es necesaria para tomar la curva del lugar de los hechos, también es cierto que la imprudencia impericia y falta de cuidado evidente del señor Jorge Eliecer Narváez, fue el factor determinante en la producción del hecho. En primera instancia el señor Narváez no contaba para el momento de los hechos con licencia de conducción, elemento que nos permite inferir que no contaba con las capacidades técnicas para el ejercicio de la actividad peligrosa de la conducción de vehículos automotores, así las cosas, encontramos que conforme al informe presentado a petición de la fiscalía firmado por el agente de la policía de tránsito del Cauca Nixon Adalberto Ortiz Marín, quien en las imágenes aportadas y en el contenido del mismo evidencia que el señor Jorge Eliecer **contaba con espacio suficiente para realizar un tránsito seguro** por la vía sin contacto necesario con el tractocamión, pero como ya manifestamos el señor Jorge Eliecer no acreditaba las condiciones necesarias para maniobrar un vehículo y esa fue la causa real aplicable para la ocurrencia del hecho originario de esta demanda.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

De hecho la conducción de un vehículo moto, que no sea en maniobra de adelantamiento, no debe hacerse en eje de vía. Encontramos, además, que los que aquí si predicen víctimas directas del hecho, al momento de la ocurrencia del mismo, transitaban la vía panamericana **traccionando una carreta**, maniobra que desde todo punto de vista excede los parámetros de cuidado aplicables en la vía. Sin duda, el hecho de llevar una carreta traccionada por una moto **(Que no está diseñada para esos menesteres)** es un acto que definió sin duda alguna la imposibilidad de que el señor Jorge Eliecer Narváez pudiera evitar el impacto con el tractocamión, pero asumimos que tanto el conductor como el parrillero asumieron el riesgo de hacer tan arriesgada maniobra, pero definieron adicionalmente poner en peligro a las personas que acudieron al tránsito de la vía en el mismo momento como efectivamente fue el caso del tractocamión conducido por el señor Andrés Felipe.

Igualmente, encontramos que la motocicleta al momento del accidente y como consta en el informe del agente de tránsito aportado con la demanda, no contaba con la certificación de revisión técnico mecánica, elemento que nos permite inferir que eventualmente al momento de que los que se predicen víctimas directas en la demanda, al procurar maniobrar el vehículo este no respondió adecuadamente e impacto con la parte posterior del tractocamión.

Así mismo, en el mencionado informe encontramos que los ocupantes de la moto no contaban con los elementos de protección necesarios para el momento de la ocurrencia del hecho, es decir no llevaban casco, guantes, chaleco reflectante y luces encendidas, elementos necesarios para el adecuado tránsito en este tipo de vehículos, factores que definieron la gravedad de las lesiones de los ocupantes de la moto.

En el croquis elaborado posterior al incidente encontramos que el punto PI (punto de impacto) se encuentra a una distancia superior a un metro de distancia de la acera u orilla de la vía, en este entendido encontramos que efectivamente el conductor de la moto irrespetó el contenido normativo contenido en el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, que en su inciso segundo determina la prohibición para que las motocicletas transiten a más de un metro de la orilla u acera, factor que para el caso que aquí nos ocupa resulta de absoluta trascendencia, ya que determinó el impacto entre los vehículos.

Por lo anterior, es evidente que lo consagrado en el hecho 1 de la demanda no concuerda con la realidad en lo atinente a la identificación de responsabilidad que se pretende hacer.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

HECHO SEGUNDO: NO ME CONSTA. nos acogemos a los contenidos de la historia clínica del señor GUSTAVO DORADO y a las determinaciones contenidas en el informe forense adelantado, sin embargo, es necesario aclarar que conforme a los análisis facticos desarrollados en el hecho anterior, el accidente ocurrió por la imprudencia, impericia y falta de capacidad del conductor de la motocicleta y que el señor Gustavo Dorado, de manera consciente accedió a realizar las maniobras por demás irresponsables, como fue el hecho de llevar una carreta traccionada con sus manos mientras iba como parrillero de la moto conducida por el señor Jorge Eliecer Narváez, por todo lo dicho, encontramos que las victimas se pusieron en una situación de riesgo fuera de todos los limites admisibles y definieron por ello la determinación de accidente.

HECHO TERCERO: NO ES CIERTO: el contenido del hecho no puede ser aceptado, en el entendido de que se pretende hacer una transcripción del informe de medicina legal desarrollado conforme a la necropsia practicada al señor Gustavo Dorado Cabrera, pero en la transcripción encontramos que la libelista usa la expresión “**quien fue colisionado por un tracto camión**” elemento que carece de verdad y determina abiertamente la mala fe en el entendido de que el escrito original aportado incluso por la misma parte demandada claramente se lee “**quien colisiona con un tractocamión**”.

Por lo anterior, no es aceptable que se tenga este hecho en cuenta, en el entendido de que al hacer la transcripción y mención de un documento oficial se pretendió con esto darle un alcance y un sentido diferente al que realmente contiene, encontrando en ello mala fe en dicho actuar.

HECHO CUARTO: NO ME CONSTA. nos atenemos a los criterios de verdad que asigne el señor juez a los documentos aportados para la comprobación del hecho.

HECHO QUINTO: NO ME CONSTA. nos atenemos a los criterios de verdad que asigne el señor juez a los documentos aportados para la comprobación del hecho.

HECHO SEXTO: NO SE ACEPTA. sea este el momento para manifestar nuevamente la improcedencia de la reclamación, teniendo en cuenta que las lesiones que se relacionan en este hecho y las incapacidades derivadas dieron ocasionadas por el actuar despreocupado y negligente de quien se predica víctima, al desarrollar una actividad que se cataloga como peligrosa, y que fue por su impericia y falta de aptitud para el desarrollo de dicha actividad que se originó el accidente en el que resultó lesionado el señor Narváez y murió el señor Dorado, por lo anterior no es preciso tener las incapacidades y padecimientos como factores



determinantes de tasación eventualmente indemnizatoria en cabeza de ninguno de los demandados.

No se puede pretender de un tercero el pago de perjuicios originados por la acción de quien en ultimas se predica víctima, más aún cuando se va en contra vía de postulados de cuidado común y aun así se persiste en la determinación de culpabilidad de un tercero.

HECHO SEPTIMO: NO SE ACEPTA. claramente reposa en el informe de policía las características propias que constituyeron el accidente, entre ellas particularmente las que permiten estructurar la negligencia impericia y falta de cuidado de quienes se pretenden como victimas directas en este hecho.

En el mismo informe a portado con la demanda, más exactamente en las fotos de reconstrucción 3D, es evidente que las distancias de los vehículos al momento del impacto determinan que el señor Jorge Eliecer contaba con el espacio suficiente para evitar la colisión, adicionalmente, se puede observar en ellas que la maniobra desplegada por el señor Andrés Felipe Ortega, no fue una maniobra imprudente sino una maniobra necesaria atendiendo a las dimensiones específicas del tractocamión y del ancho de la vía, también se observa, que los ocupantes de la moto no llevaban los elementos de seguridad necesarios y que incluso traccionaban una carrera con la moto, elementos todos que determinaron la ocurrencia del accidente.

De lo dicho, encontramos que a unos cuantos metros del lugar del accidente, la señora que se menciona como testigo pasó por el lado del tractocamión y que conforme a la maniobra necesaria para tomar la curva ella procedió a amorillarse, sin embargo, por las características mencionadas en el párrafo anterior para los señores Narváez y Dorado no les fue posible ubicarse dentro del metro de distancia determinado por la norma de tránsito para su circulación, debido a que entre otras cosas traccionaban una carrera que les impedía realizar cualquier maniobra en torno a las invariables posibilidades circunstanciales que presenta una vía de tránsito alto como lo es la vía panamericana.

HECHO OCTAVO: NO SE ACEPTA. del contenido de la declaración se pueden extraer varias situaciones que determinan el final por demás lamentable del señor Gustavo Dorado, en primer lugar, la señora hace claridad de que el impacto no fue con el frente del camión, elemento que nos permite determinar que efectivamente los ocupantes de la moto no fueron arrollados, como se pretende hacer ver en la demanda, sino que estos fueron los que impactaron el tractocamión, segundo, que en los momentos posteriores al accidente, no se prestó la atención médica



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

adecuada para el manejo de las heridas del señor Gustavo Dorado, elementos que sin duda definieron la gravedad de las lesiones, ya que como se lee en la declaración no se aplicaron los procedimientos de inmovilización necesarios, de hecho, la señora Ilde León Molina intentó levantar al señor Gustavo Dorado, pero como ella misma lo manifiesta le fue imposible debido a las lesiones.

Adicionalmente, es menester que la señora Ilde León Molina ratifique su declaración en el momento idóneo para su desarrollo dentro de este proceso.

HECHO NOVENO: ES CIERTO. sin embargo, a pesar de que la propiedad recae en cabeza de mi representada Leasing Bancolombia S.A., hoy BANCOLOMBIA S.A. jurisprudencialmente se a definido la inapropiada aplicación de criterios de responsabilidad adaptable al propietario de un bien que mediante la figura del contrato de Leasing entregó plenamente sus posibilidades de control y manejo a otra persona, criterio que determina la imposibilidad de vincular por pasiva a Leasing Bancolombia S.A.

Por lo anterior, encontramos que la Corte Suprema de Justicia a definido que es responsable civilmente por un hecho originado en relación a un bien, quien, en su calidad jurídica respecto al mismo, tenga la posibilidad de definir el control, administración y manejo de este, en ese entendido, quien ejerce disposición y tiene entre sus facultades las obligaciones inherentes a la determinación de acciones que definan la realización de la actividad, de tal manera que en esa aplicación pueda identificarse en su facultad los procedimientos de cuidado necesarios para evitar que por el funcionamiento del bien se creen riesgos adicionales a los que de por sí enmarcan la actividad que este desarrolla. Lo anterior, para aterrizarlo al caso de los vehículos, las posibilidades de control, manejo y administración, son entre otras la escogencia del conductor, la definición de contratos operaciones, la adquisición de seguros, la obligación de realizar la revisión tecno-mecánica, la definición los mantenimientos y todos aquellos aspectos técnicos que determinan en cierta manera el adecuado funcionamiento y en relación a ello el ejercicio de la actividad útil respecto a las capacidades del bien y quien tenga esas potestades definirá para sí la responsabilidad respecto al uso del bien.

Para el caso concreto, Leasing Bancolombia S.A. entregó en cabeza de Jesús Orlando Arcos, la tenencia del bien y con ella toda acción dispositiva sobre él, esto dentro de los postulados contractuales de la figura de LEASING elemento que define la imposibilidad de tener a la compañía como responsable por cualquier hecho desarrollado dentro de la actividad del vehículo de placas WDK-252, entregado por el lapso contractual fijado.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

HECHO DÉCIMO: ES CIERTO. conforme a los documentos aportados y a la naturaleza del incidente, sin embargo, de ninguna manera representa esto derivación de responsabilidad en cabeza de Leasing Bancolombia S.A., hoy BANCOLOMBIA S.A. atendiendo a los criterios jurisprudenciales ya mencionados, la definición de responsabilidad penal aplica eventual y exclusivamente para el conductor del vehículo.

HECHO DÉCIMO PRIMERO. NO SE ACEPTA. en primer lugar, no corresponde a un agente de tránsito la definición de grado de certeza, más aún bajo los parámetros textuales colocados en este hecho de la demanda, donde se pretende mostrar una de las variables aplicables al hecho.

Con antelación se ha expresado ampliamente en este escrito que no la maniobra desarrollada por el señor Felipe Ortega fue una maniobra necesaria, determinada por las características físicas propias tanto de la carretera como de las dimensiones del tractocamión. Intencionalmente en la demanda se desconoce el hecho de la irresponsable conducta de los que aquí se pretenden víctimas directas, ya que como igualmente se ha dicho en demasía, fueron ellos quienes asumieron un riesgo excesivo al transitar conduciendo un vehículo para el cual no se tenía la capacidad y pericia necesaria, muestra de ello es la ausencia de licencia de conducción, no portaban los elementos de protección requeridos, traccionaban una carreta usando el cuerpo de parrillero como punto de anclaje y transitaban fuera de la distancia definida para el flujo de motocicletas definido por el Código Nacional de Tránsito, de un metro contado desde la acera.

Por lo dicho no se puede tener, como se pretende en este hecho, lo manifestado por el agente de tránsito como un elemento aceptable para definir la responsabilidad, porque abiertamente desconoce los criterios técnicos y normativos adicionales que intervinieron en el hecho, con base en la redacción del informe policial, que por cierto, tampoco tiene la suficiente claridad en la aplicación jurídica en torno al hecho que investigó e informó a la fiscalía. No se acepta, la identificación de responsabilizada por demás mal elaborada que hace el agente de tránsito.

HECHO DECIMO SEGUNDO. NO ES CIERTO. reiteramos que en primer lugar la maniobra desarrollada por el conductor del tractocamión el señor Felipe Ortega, fue una maniobra necesaria debido a que la vía en el lugar de los hechos es angosta y que el tracto-camión tiene una extensión grande por lo que resulta inevitable que la parte del tráiler del mismo al momento de realizar las curvas consecutivas en el lugar de los hechos salga del carril de su tránsito, además, como también lo advierten los informes presentados por los agentes policiales, el conductor de la moto no contaba con licencia de conducción, elementos que nos permite identificar



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

la falta de aptitud para el desarrollo de la actividad, precisamente la falta de pericia definió el desenlace ya que perfectamente contaba con el espacio suficiente para realizar una maniobra evasiva, pero más aun se debe manifestar que la moto transitaba casi por la mitad del carril de su flujo, y el Código Nacional de Transito define que las motos deben circular a máximo un metro contado desde la acera, elementos desconocido por el señor Jorge Eliecer Narváez, adicionalmente, no llevaban casco, ni chaleco reflectivo, accesorios que sin duda hubieran disminuido la gravedad de las lesiones, como si fuera poco, los ocupantes de la moto llevaban traccionando una carreta, poniéndose en excesivo peligro ellos y a las personas que concurrieran a la vía, el informe de transito además permite observar que la moto no contaba con el certificado de revisión tecno-mecánica, e igualmente posible es inferir que mecánicamente no tenía el funcionamiento idóneo y por ello no pudo maniobrar la moto sumado a su falta de capacidad de manejo.

Por todo lo dicho, es evidente que fueron quienes se predican victimas quienes, con sus omisiones, impericia, falta de cuidado y negligencia manifiesta asumieron un riesgo desbordado y causaron el accidente.

Por ultimo y atendiendo a la cinemática del accidente, vemos que fue la moto la que colisionó con el Tracto-camión, en el entendido de que, de haber sido al revés, este los hubiera impactado con la parte anterior.

HECHO DÉCIMO TERCERO. NO SE ACEPTA. muestra de las calidades del conductor es que como bien se manifiesta en el informe de tránsito, este no tiene sanciones ni multas de tránsito, elemento que permite inferir su cuidado y buenas practicas al momento de ejercer la labor de conducción, además, cuenta con licencia de conducción categoría C-3, que certifica su competencia técnica y física para desarrollar la actividad, cosa diferente se observa de los ocupantes de la moto, que por parte del conductor no tenía ni siquiera licencia de conducción, además de que no contaban con elementos de protección personal, la moto no contaba con Certificación Tecno-Mecánica, fuera de eso traccionaban una carreta con su cuerpo a propulsión de la moto. Por lo dicho resulta claro concretar quien en realidad ejerció maniobras y conductas **imprudentes y carentes de pericia.**

HECHO DÉCIMO CUARTO. NO SE ACEPTA. aunque la vía no tiene bermas, encontramos que la causa real del accidente no obedece a la falta de espacio para realizar una maniobra evasiva, sino a la falta de capacidad del conductor de la moto, hallando que transitaba por la mitad del carril de su flujo, cuando las normas que regulan el tránsito, determinan claramente que deben circular a un metro contado a partir de la acera u orilla, de haber simplemente acatado esta norma, el accidente no se hubiera presentado y por consiguiente la muerte del parrillero. Ahora, no se



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

puede por causa de una conducta irresponsable propia pretender indilgar responsabilidad en terceros que como ya se ha demostrado ampliamente cumplieron con los parámetros de cuidado definidos para cada una de las actividades. Reiteramos, aun con la ausencia de las bermas en le tramo vial del incidente, el espacio para maniobrar de la moto era más que adecuado, e incluso con el solo acatamiento de la norma de circulación había sido suficiente para evitar la ocurrencia del incidente.

HECHO DÉCIMO QUINTO. Y DÉCIMO SEXTO. NO ME CONSTAN. Corresponde a la parte actora aportar los elementos que permitan definir la veracidad de las afirmaciones contenidas e igualmente determinar la utilidad de los mismos en relación a los hechos.

HECHO DÉCIMO SÉPTIMO. NO SE ACEPTA. del informe de transito aportado al proceso no se puede definir ningún grado de certeza, en el entendido de que son pruebas agregadas pero no controvertidas, por tal razón, carece de aplicación jurídica las manifestaciones contenidas en este hecho, igualmente reiteramos que bajo los argumentos expuestos en este escrito con antelación, es evidente que existieron criterios claros de responsabilidad aplicable a las propias víctimas, que en ultimas, determinaron tanto la ocurrencia del hecho gestor como la gravedad de las lesiones de cada uno de los ocupantes de la moto. Los que se pretenden victimas directas acudieron a la vía pública, dejando al azar su integridad conociendo claramente la falta de aptitud para la conducción, la carencia de elementos de protección personal, la falta de condiciones mecánicas del vehículo, y el transito por zonas prohibidas y es evidente que ante la presencia de tan graves actos reprochables indefectiblemente deviene la ocurrencia de un suceso lamentable, como efectivamente sucedió.

HECHO DÉCIMO OCTAVO. NO SE ACEPTA. si bien es cierto que el vehículo es de propiedad de LEASING BANCOLOMBIA S.A. hoy BANCOLOMBIA S.A. también es cierto que el libelista desconoce los alcances y aplicaciones jurisprudenciales que se han dado al contrato le leasing, donde como ya se mencionó, extrae del ámbito de control y manejo a quien entrega el bien cobijado por esta figura contractual. Reiteramos lo que se ha decantado ampliamente en este escrito, la maniobra ejercida por el conductor del tracto-camión, es una maniobra necesaria y reposan en el expediente claros postulados aplicables a determinar la responsabilidad del hecho en cabeza de quienes aquí se predicen víctimas.

HECHO DÉCIMO NOVENO. NO SE ACEPTA. conforme a los informes de transito aportados y a las demás pruebas documentales aportadas, encontramos que no se en primeramente no se desplegó conducta imprudente por parte del conductor del



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

tracto-camión, la maniobra realizada es una maniobra necesaria debido a las características físicas de la vía y del tracto-camión en sí y segundo que el hecho de haber o no berma no fue un elemento determinante en la ocurrencia del accidente, toda vez que la moto transitaba fuera de los límites definidos para su circulación.

HECHO VIGÉSIMO. NO SE ACEPTA. atendiendo a la literalidad del hecho, debemos expresar que LEASING BANCOLOMBIA S. A. hoy BANCOLOMBIA S.A. no es un ente público, y mucho menos tiene por objeto el mantenimiento de y/o conservación de vías, en cuanto al resto del contenido del hecho consideramos que, en un tema técnico, pero que en la demanda solo se le da manejo especulativo subjetivo sin ningún criterio de conocimiento específico, por lo tanto, no puede ser aceptado como argumentación fáctica dentro de este proceso.

HECHO VIGÉSIMO PRIMERO. NO ME OPONGO. de la consumación de la audiencia prejudicial solo se puede predicar en este caso su fracaso al no existir ánimo conciliatorio, no determinando eso relevancia para el establecimiento de responsabilidad eventualmente aplicable.

DECLARACIONES Y CONDENAS:

En representación de LEASING BANCOLOMBIA S.A. manifiesto mi oposición firme a las pretensiones contenidas en la demanda, al considerar que no existen elementos de juicio suficientes que permitan determinar de manera clara y cierta que para mí representado se pueda acusar responsabilidad en la ocurrencia de los perjuicios que se pretenden y mucho menos hay lugar a que se fijen indemnizaciones o pagos por los padecimientos de quien se pretenden víctimas, y así se procurara probar. Se recalca la falta de parámetros reales que fundamenten la determinación de tasación de las pretensiones, no se encuentra valores que sustenten los montos de pérdida solicitados.

Es de especial trascendencia expresar que las pretensiones de la demanda son más que excesivamente altas, y denotan un afán de lucro imposible de atender, como quiera que el eventual resarcimiento en ningún caso podrá ser superior a la verdadera magnitud del daño causado, sin que lo manifestado implique reconocimiento de responsabilidad u obligación alguna a cargo de mis representados.

No es solo presentar demanda, pedir medidas cautelares para colocar contra la pared a una persona, al cual se le coacciona de manera tal que le lleva a una afectación patrimonial *in sito*, sin siquiera haberse declarado y condenado, todo ello con miras a la obtención A TODA COSTA de una indemnización. No, no solo se debe alegar y cautelar como se ha hecho en este caso, por una la supuesta



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

responsabilidad civil extracontractual, sino que se debe probar racionalmente y en forma lógica sin desmesurados actos de coacción, que sí existió daño o el supuesto detrimento, por cuanto los mismos no son susceptibles de presunción, acreditando debidamente su producción, esto comprende la demostración de esos hechos, su identificación y obviamente su cuantificación cierta, sin perjuicio de la relación de causalidad que tienen aquellos con la acción u omisión del demandado directo y tercero, ya que al Juez de conocimiento le está vedado presumirlos, por ello los hechos y pretensiones deben ser probados con los medios consagrados por la normatividad procesal, bajo un criterio racional, de trato, y por ello lo que no se pruebe en legal forma, no existe y por ende no puede ser considerado por el Juez y operador judicial.

EXCEPCIONES DE FONDO

En caso de no prosperar y ser resuelta negativamente la EXCEPCION PREVIA propuesta que como mecanismo de defensa igual se ha planteado, de la real y cierta FALTA DE LEGITIMIDAD POR PASIVA, planteamos las siguientes excepciones de fondo:

1.- NO EXISTENCIA DE LA COMPROBACIÓN CIERTA DE LA RESPONSABILIDAD GENERADORA DEL DAÑO EN LA FORMA COMO SE EXPRESA EN LA DEMANDA. ROMPIMIENTO DEL NEXO DE CAUSALIDAD. CULPA Y PARTICIPACION EN EL HECHO DAÑOSO DE LA PROPIA VICTIMA.

Jurisprudencialmente se ha determinado la imperiosa necesidad de comprobación del daño que se pretende indemnizar, responsabilidad que se asigna y determina en cabeza de quien demanda; adicionalmente se determina la necesidad de identificar la conducta generadora de daño, identificando los elementos constitutivos y desencadenantes que edifican y estructuran la culminación del daño. La corte suprema de justicia identifica la institución del daño como un elemento determinante y concurrente de la responsabilidad civil planteamiento que se expone así:

«De suyo, que si el daño es uno de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, su plena demostración recae en quien demanda, salvo las excepciones legal o convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era -y es- imperioso probar que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible.»

Sentencia de 18 de diciembre de 2008, exp: 88001-3103-002-2005-00031-01.



De lo dicho, debe darse claridad en la concepción de responsabilidad, fijación esta que se encuentra determinada de manera cierta en nuestro ordenamiento jurídico, consolidando composición estructural de la figura jurídica que debe en todo caso tenerse probada y afianzada para la resolución de los conflictos que en virtud de ella se generan, conforme a ello, claro deben estar los requisitos de existencia y generación de la responsabilidad civil, a saber.

Debe existir un daño irrogado sobre una cosa, un derecho o una persona.

La responsabilidad no debe derivarse de un contrato.

La causación del daño debe ser imputable a un sujeto o a varios.

Dando una vista aún más precisa encontramos la determinación que da el código civil en su artículo 2341, señalando los presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad civil extracontractual:

- i. El perjuicio padecido.
- ii. El hecho intencional o culposo atribuible al demandado.
- iii. La existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores.

De la anterior exposición encontramos que para el caso concreto no se logró con la demanda identificar de manera precisa la relación causal determinante de responsabilidad plena entre mi representado y el hecho originario que se pretende reclamar, ya que como se ha manifestado en la parte primera de este escrito encontramos que las imprudencias y carencias de aptitud del señor Jorge Eliecer fueron las causas determinantes que originaron el accidente que sirve de base para esta reclamación.

En desarrollo de lo dicho, vemos que hay varios elementos de análisis necesarios, a saber:

- El conductor de la motocicleta, el señor Jorge Eliecer Narváez, no contaba ni cuenta con licencia de conducción de automotores, elemento que nos permite inferir su falta de capacidad de conducción, falta de pericia necesaria para ejercer una actividad que conforme a las normatividad civil se encuadra como una actividad peligros, que ya de por si determina riesgos elevados en relación a otras actividades y que indefectiblemente determinó el impacto entre la moto y el tractocamión, este hecho impidió que retomara la adecuada zona de tránsito de las motos en la vía pública.
- El artículo 96 del Código Nacional de tránsito, establece que las motos deben circular a un metro máximo de distancia entre la acera u orilla, elemento que,



conforme al informe aportado con la demanda elaborado por el agente de policía de tránsito, encontramos que el punto de impacto excedía abiertamente ese metro de distancia, encontramos con ello que la moto circulaba casi por la mitad del carril de su flujo. Conjugando este hecho con el anterior, vemos que si el señor Jorge Eliecer hubiera tenido las condiciones necesarias para el manejo y conducción de este tipo de vehículos tuvo el espacio suficiente y necesario para evitar de manera adecuada el impacto contra el tractocamión, pero debido a su falta de pericia y al transitar lejos del límite establecido para su circulación impactó el tractocamión causando con ello lesiones para su persona y la muerte en el caso de su parrillero el señor Gustavo Dorado.

- Para el momento de la ocurrencia del hecho, los ocupantes de la moto no contaban con los elementos necesarios para su protección y de obligatorio uso en la concurrencia a la vía pública, en este sentido en el informe de tránsito el agente que lo firma manifiesta que no llevaban cascos, ni chalecos reflectantes, elementos de uso obligatorio conforme a los postulados de protección contenidos en el Código Nacional de Tránsito, este hecho precisamente definió sin duda la gravedad de las lesiones de los ocupantes de la moto, esta acción por demás negligente, imprudente e irresponsable es únicamente atribuible a los que se pretenden víctimas directas quienes al asistir a la vía en esas condiciones asumieron los riesgos que esto implica.
- La motocicleta en la que se movilizaban no contaba con revisión técnica mecánica, factor que nos permite inferir que si eventualmente el conductor de la misma pretendió detener la marcha esto no fue eventualmente posible debido a las malas condiciones mecánicas de la misma, hecho determinante que lo llevó a colisionar con la parte posterior del camión.

Aunado a lo dicho, en la demanda no se da determinación clara del daño patrimonial pedido, situación que impide su reclamación, entendiendo que los factores de tasación no son claros y precisos, requisito necesario para identificar una eventual reparación, ya que, para que el daño sea reparable debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético.

Las altas cortes han resaltado la definición y alcances respecto a las posibilidades que pueden surgir en torno a la identificación de responsabilidad aplicable en un sujeto respecto a la ocurrencia de un hecho generador de daño. También se ha decantado ampliamente que no solo por el hecho de la participación en el hecho originador *per se* amerite asumir responsabilidad en el mismo. Por lo anterior, se han determinado una serie de elementos que constituyen el concepto de culpa y



que en su conjunto posibilitan la identificación de los sujetos participantes y de los grados de injerencia respecto al hecho.

Hemos ya afirmado en tanto a lo acaecido, y que además el actor debe probar en contra bajo el principio de la carga dinámica de la prueba, y conforme la Corte Constitucional ha predicado en sentencia T-733/2013:

“La noción de carga de la prueba ‘onus probandi’ es una herramienta procesal que permite a las partes aportar los elementos de prueba para acreditar los hechos que alega el demandante o las excepciones propuestas por el demandando. Su aplicación trae como consecuencia que aquella parte que no aporte la prueba de lo que alega soporte las consecuencias. Puede afirmarse que la carga de la prueba es la obligación de ‘probar’, de presentar la prueba o de suministrarla cuando no ‘el deber procesal de una parte, de probar la (existencia o) no (sic) existencia de un hecho afirmado’, de lo contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero”.

Como tal mantenemos la línea de lo expresado al contestar los hechos de la demanda que:

Las condiciones de modo, tiempo y lugar resultan variables frente a la realidad conforme a lo narrado en la demanda, esto según lo que se ha podido visualizar y analizar por parte del señor Felipe Ortega, quien es persona experimentada en el conducir y con la que hemos podido visualizar los elementos de ocurrencia.

Para el momento de la ocurrencia del hecho, como se ha manifestado antes, la maniobra que desarrollo el señor Ortega, fue una maniobra necesaria atendiendo a las características de ancho de la vía y a las curvas sucesivas en el sector, este se vio obligado físicamente a realizar la maniobra dicha, la cual indefectiblemente concurre a que la parte posterior del camión se incorpore por pocos centímetros al carril de contra flujo, pero que observando que aun así queda suficiente espacio para que una moto en condiciones normales pase sin novedad, como efectivamente lo hizo una moto antes del accidente en el mismo sitio, pero debido a la incapacidad del señor Jorge Eliecer impactó al camión.

2- FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA

Uno de los elementos determinantes para el desarrollo de cualquier acción judicial que se pretenda, es la identificación y caracterización de los sujetos procesales que tendrán cabida dentro del litigio que se sucinta, elemento ligado necesariamente a la ocurrencia directa del hecho gestor o atado a un vínculo que determine su afectación indirecta con la ocurrencia del mismo.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

La ley y la jurisprudencia han decantado los niveles de relación aceptable que facultan a un sujeto para encuadrar su persona como sujeto procesal, definiendo los grados de parentesco aplicables. Adicionalmente, debe acreditarse el grado de relación cuando se trata de víctimas indirectas y mediante el material probatorio necesario acreditar el grado de afectación y su vinculación como víctima directa de un hecho dañino originador.

Por lo anterior y aterrizando al caso concreto, encontramos que en la demanda se pretenden como víctimas indirectas a Angelica Cardona Bañol, Isabel Franco, Luis Miguel Muñoz y a María Nelly Dorado Cabrera, sin embargo, en no se acredita el lazo filial que los hace legítimos para hacer parte en este asunto.

En el caso concreto de Angelica Cardona Bañol, Isabel Franco y Luis Miguel Muñoz, se dice en la demanda que son hijos de crianza del señor Gustavo Dorado, sin embargo no se aporta prueba alguna que permita inferir la veracidad de ese hecho, aunado a ello, la jurisprudencia nacional a determinado que es necesario para el reconocimiento de los lazos filiales por crianza que estos efectivamente se prueben, y que la relación sea de tales características que el grupo social al que pertenecen los reconozca como familiares por las constantes relaciones que hacen presumir a quien con ellos conviven en cuento al entorno, de que sin lugar a dudas son familiares. Para el caso que aquí nos ocupa encontramos que no se han aportados lo suficientes elementos de prueba que permitan tener certeza de que efectivamente los demandados mencionados en precedencia efectivamente convivían dentro del grupo familiar del señor Dorado Cabrera, y que mucho menos tenían una relación de afecto tal que permitiera generar una creencia generalizada en su entorno social que determinara un parentesco presuntivo.

La corte se ha pronunciado al respecto de la siguiente manera:

...la posesión notoria del estado de hijo opera como una presunción legal de paternidad - iuris tantum - , edificada sobre la base de la conciencia más o menos uniforme y generalizada que el presunto padre ha generado a la comunidad, cuando despliega, durante un lapso prolongado y relevante, aquellas acciones que usual y razonablemente resultan indicativas de la asunción de dicha calidad respecto del hijo y que, por lo mismo, originaron y suscitaron espontáneamente la mentada creencia a lo largo del ámbito social correspondiente, hasta convertirla en una situación tan nítida, palpable y obvia que se da por descontada como cierta por parte de los miembros de la colectividad.

(...)

...lejos de poderse reducir a mostrar la existencia de vagas creencias en un vecindario acerca de su real ocurrencia, tienen que traducirse en hechos concretos y susceptibles



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

de ser sometidos a una razonable verificación en busca de la certidumbre y no de la mera probabilidad ... y a recabar, por el contrario, evidencia irrecusable acerca de actos que acrediten cumplidamente que el hijo, con ese carácter, y de manera visible para amigos o relacionados, mantuvo y, si fuere el caso, aún mantiene con el presunto padre vínculos constantes de la clase de los que describe el texto contenido en el artículo 6º de la ley 45 ... ”. (G.J. t, CCXXV, pag. 522; reiterada en SC) (SC, 3 oct. 2003, rad. 6861).

Por lo anterior, no es procedente que se tenga como demandado en el siguiente proceso judicial, y solicitamos se excluya para los fines procesales que aquí se persiguen conforme a los postulados legales y jurisprudenciales pertinente.

Adicionalmente, también se ubica como demandante a la señora María Nelly Dorado Cabrera, pero no se aporta con la demanda el registro civil de nacimiento que permite identificarla como legítima reclamante, teniendo en cuenta el vínculo familiar que si se argumenta textualmente en la demanda pero que no se prueba.

Así las cosas citamos a la Corte en relación a la legitimación que en este caso creemos carece por su falta de pruebas que determinen la certeza que permita su vinculación procesal.

“la legitimación en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una excepción, sino que es uno de los requisitos necesarios e imprescindibles para que se pueda dictar providencia de mérito, ora favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque entendida ésta ‘como la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio; de allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión’ (sentencia de casación N° 051 de 23 de abril de 2003, expediente 76519)” CSJ SC de 23 de abril de 2007, Rad. 1999-00125-01.

Igual suerte debe correr, cualquiera de los demandantes de los cuales su acreditación de parentesco no sea legítima, legal, válida o no corresponda a la verdad, y sea determinada en este proceso, lo cual por control de legalidad y valoración probatoria deberá hacerse, inclusive de oficio.

4- NO EXISTENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE SUSTENTEN LOS PERJUICIOS SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.

En subsidio de la(s) anterior(es), y conforme a los requisitos que enseñan y sustentan el predicamento de la responsabilidad civil extracontractual, se alega y excepciona la no existencia de elementos de prueba hasta este momento procesal,



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

de los perjuicios alegados y pretendidos, y mucho menos se tasan con ajuste a los postulados jurisprudenciales establecidos para el efecto tanto en la jurisprudencia civil como la administrativa, que hoy en un solo bloque definen y marcan el lindero en el tema.

Hoy, los actores relacionados con la víctima por un registro civil algunos y otros que pretenden la filiación con él solo hecho del testimonio de terceros no acreditados y de filiaciones que no nacen a la vida jurídica por su inapropiada comprobación y que por ende carecen de aplicabilidad procesal en este asunto para tenerse como una presunta relación de parentesco o dependencia, tienen la obligación de cumplir con la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda y por ello cada uno de los efectos del daño que llevan a pedir una indemnización debe estar claramente probada a través de los medios idóneos que la ley consagra.

Sin perjuicio de lo dicho en defensa del interés de mi mandante, en el remoto evento en que el señor juez declare no probadas las anteriores excepciones, ruego estudiar y dar viabilidad, que la parte actora, no allega un pleno que demuestre todos los perjuicios materiales que pide, y que efectivamente se dice se han ocasionado.

Expresamos con toda certeza, que el cálculo que se expresa en el libelo de demanda sobre los supuestos perjuicios resulta equívoco e impreciso, y exorbitante.

Encontramos que efectivamente quien realiza la determinación de los valores correspondientes a los honorarios de las víctimas directas (ANA CRISTINA DORADO) efectivamente tiene interés directo en la determinación de las cifras indemnizatorias, por ser también demandante, elemento que precisa la improcedencia de la vinculación de dichas certificaciones como mecanismo definitivo de los salarios, en este sentido encontramos que no se aportó los contratos laborales que precisaran en ultimas los objetos y salarios que contractualmente se fijaron realmente. De lo expuesto, nos oponemos a que se tengan las certificaciones salariales como prueba de los ingresos de las víctimas directas, atendiendo al beneficio inmediato que esta certificación refleja para quien la expide.

Por lo anterior, solicito tener en cuenta la presente excepción al momento de dictar la sentencia.

En la demanda se pretende elaborar una determinación de responsabilidad aplicable en exclusiva para mis representados, responsabilidad que se pretende representar en la exigencia del pago de perjuicios causados por la consumación del hecho dañoso. De lo dicho, no solo se pretende el pago de perjuicios a quien se predica familia directa de los señores Jorge Eliecer Narváez y Gustavo Dorado, sino



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

que, además se pretende la indemnización de una serie de perjuicios a terceros que ni siquiera se acredita su relación familiar, que según la narración fueron objeto de afectación, teniendo como argumento único la existencia de un lazo filial (inexistente-no probado) que *per se* pretende genera la acreditación como receptores indemnizatorios.

Con base en lo anterior, encontramos que la Corte Suprema ha determinado la necesidad de la comprobación del daño como un elemento necesario de su existencia, factor determinante para un eventual reconocimiento indemnizatorio, situación alejada de estar consolidada en este asunto, toda vez, que no se aporta prueba del daño en cabeza de dichos individuos procesales y menos aún de la cuantificación, niveles y efectos en relación al hecho.

La corte lo expresa en los siguientes termino:

No en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse, inexorablemente, con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia -como hecho jurídico que es-, a la vez que su extensión y medida, el Juez no poseerá argumento válido para fundar, en línea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo, en tal virtud, exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante, a lo largo de la litis, haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia (v. gr.: intereses moratorios). (...). Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la Sala, ‘repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración’ (LVIII, pág. 113) (CSJ, SC del 25 de febrero de 2002, Rad. n.º 6623; negrillas fuera del texto).



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

Es cierto que en la actualidad la medicina y la psicología permite la determinación cualitativa y cuantitativa de las afectaciones psicosociales que originarias de un trauma personal o familiar decantando este hecho una posibilidad abierta a la tasación en si de una eventual indemnización, por lo anterior, resulta inadecuado recurrir a meras expectativas y presunciones por razón de parentesco, se pretende la existencia de un perjuicio. La corte adicionalmente definió la necesidad de en la medida de las posibilidades llevar al mayor grado de certeza posible la determinación de un daño y por consiguiente del perjuicio que este genera, elementos que para el caso concreto son perfectamente determinables y cuantificables y que deberían ser atendidos en caso de una eventual definición indemnizatoria aplicable para las partes sobre las que se predique contingente responsabilidad.

Los ingresos que sirven de sustento para la identificación indemnizatoria que se persigue con la demanda, conforme a la misma narración no son permanentes y no hay indicio cierto que permita evidenciar que la situación de interrupción fuese a cambiar con ocasión de perspectivas educativas o posibilidades reales de incorporación laboral, elemento que desvirtúa la posibilidad de tenerlos como permanentes en el tiempo, como perjuicios proyectados a futuro.

Adicionalmente, no es posible tener por acertada la premisa de que se pretenda por concepto de daño a la vida de relación los familiares de la víctima directa, toda vez que precisamente la naturaleza de la misma figura determina la improcedencia de su aplicación en ese sentido, ya que se debe acreditar la existencia cierta de una afectación tal, devenga en una perturbación a tal grado que origine una incapacidad de realización y gozo efectivo de las actividades de correspondencia social no económica, eventualidad que en este caso en ningún momento se acredita ni siquiera sumariamente.

El consejo de estado, en tesis acogida igualmente por la corte suprema fija postulación al respecto así:

(...)Es del caso hacer ver que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales que en este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande importancia, toda vez que quien pretenda ser compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un ser querido, tendrá que poner en evidencia -según se lee en brillantes páginas que forman parte de los anales de jurisprudencia administrativa nacional- no sólo el quebranto que constituye factor atributivo de la responsabilidad ajena "... sino su vinculación con el occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la medida de esta..."(...)

5- ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

En esta demanda al romper hay un elemento claro y extremo, cual es la recurrente alusión a perjuicios que no están probados, y a las exorbitantes sumas que se relacionan en pretensión a todos y cada uno en los demandantes, de manera que aun siendo no responsable mis poderdantes, por ende la imposibilidad de prosperidad de las pretensiones indemnizatorias en la forma predicada, en cuanto constituyen la búsqueda de indemnización de un detrimento desmedido, exorbitante, y de por si no se cumple la función de reparación, que es dable en los casos donde la justicia otorgue el derecho y declare la responsabilidad, pero no como en este caso, que es retaliativo y salido de todo contexto patrimonial, lo que lleve al Juez a en caso de ser declarada la responsabilidad en su todo o parte, debe ser el efecto de ello ajustado a que no se genere a su vez un empobrecimiento y daño a la demandante dentro del marco anormal de las pretensiones expuestas, adicionalmente, se pretende una indemnización teniendo como base de esta la existencia de unas relaciones parentales que no son acreditadas en debida forma, se pretende tener como familiares de la víctima directa a personas que no tienen dichos vínculos y que se procuran una declaraciones de terceros comprobar los nexos filiales que normativamente están determinados conforme a procedimientos declarativos y estos son abiertamente desconocidos, precaviendo mala fe en su aplicación y evidentemente desnaturaliza la indemnización de perjuicios como un mecanismo de reparar los daños causados por un hecho identificable y acá se busca efectivamente el enriquecimiento argumentando afectaciones inexistentes encuadrando de manera forzada una legitimación que no existe y que peor aún fue determinado el hecho dañoso por acciones e igualmente omisiones desplegadas por los que se pretende acreditar como víctimas directas.

6.- CULPA EXCLUSIVA DE LA (s) VICTIMA (s).

Corresponde en este instante hacer un análisis de causalidad del hecho dañoso, análisis que pretende determinar los orígenes ciertos y generadores de responsabilidad presentes en el hecho real del accidente de tránsito que nos ocupa,



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

para ello se hace necesario identificar las situaciones particulares que finalmente determinaran si la responsabilidad de resarcir corresponde al agente reclamado en la demanda o si bien recaen en quien se pretende víctima.

En las acciones generadoras de daño debe tenerse la plena certeza de su origen y generación real, entendiendo esto como un criterio necesario e imperante para lograr la determinación en caso de que se pretenda indemnizar o resarcir. Existen dos factores diferenciales de identificación, la determinación del hecho dañoso por un agente identificable y la posibilidad de encausamiento por factores ajenos a la voluntad de propios del receptor o acto insuperable.

Para el caso concreto desarrollare el análisis de la culpa del agente receptor como factor determinante en la causación de su propio daño, en este sentido encontramos que si bien la producción de un daño se materializa, *per se* no reviste la obligatoriedad de resarcimiento o de imputación de responsabilidad, ya que existen posibilidades anexas de exoneración de responsabilidad para quien se predique causante y responsable por un hecho físico relacionado pero que no provocó.

En tal sentido encontramos que la culpa exclusiva de la víctima no es causa jurídica de aplicación de responsabilidad resarcible por carecer de rango atributivo en cuanto a responsabilidad con carácter reprochable; doctrinariamente encontramos una afirmación que aunque tiene valides semántica debe jurídicamente entenderse e interpretarse adecuadamente la cual dice: *“el daño que uno se causa a sí mismo no es daño en sentido jurídico”*, esto entendiendo que al no haber posibilidad de atribución a un agente generador distinto de la propia víctima imposibilita la adjudicación de responsabilidad, convirtiéndose en un hecho jurídico impropio para una determinación punitiva al ser un daño aparente, causa extraña que interrumpe la cadena causal.

En cuanto a la posibilidad de determinar responsabilidad por acción exclusiva de la víctima, tenemos que la corte suprema determinó que esta acción de participación debe estar demostrada y así mismo su efectiva determinación en el resultado. Adicionalmente, se advierte que la víctima en su despliegue conductual descuidó el deber objetivo de cuidado, al dejar al azar los posibles efectos consecuencia de su acto, que incluso previéndolos confió en poder evitarlos imprudentemente; este comportamiento displicente, descuidado y negligente encuadra en la tipología de la culpa grave, entendiéndolo asimismo como se tipifica el dolo como la intención de causar daño a una persona o a sus bienes.

Aunado a lo anterior, debe hacerse mención necesaria a que el acto determinante de la víctima que consolida el daño, opera en virtud de la infracción a una obligación previa, y no solo a la intencionalidad o azar derivado, ejemplo claro de ello es la



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

obligatoriedad que tienen los peatones de pasar la vía por la cebrá o lugares de intersección vial determinados e idóneos para hacerlo.

Reposando lo anterior al caso que aquí nos ocupa y atendiendo a que el despliegue de la conducta debe desarrollarse en el círculo de responsabilidad del autor ya que, si se lleva al círculo de responsabilidad de la presunta víctima se excluye una imputación y con ella una sanción, encontramos que en este caso los señores Gustavo Dorado y Jorge Eliecer Narváez, al momento de iniciar el viaje que terminó en el accidente que aquí se reclama, conocían de las características por demás inapropiadas del viaje que pretendían emprender, es de conocimiento evidente que el uso del caso es obligatorio, no solo por las consecuencias sancionatorias que su ausencia define, sino, por la seguridad que brinda a quien lo porta, representando en ultimas el delgado hilo entre la vida y la muerte para los motociclistas, también es igualmente conocido que para el desarrollo de la actividad de conducción de vehículos automotores es necesario la obtención de una licencia que determina las aptitudes para ejercerla, y evidente es que atendiendo a los lazos de amistad y colegaje que se presume tenían los dos ocupantes los dos conocían que el conductor no tenía este documento, igualmente cierto es el hecho de que para el rodamiento adecuado de los vehículos automotores por el territorio nacional, es preciso acreditar que anualmente se haga la revisión técnico-mecánica del mismo, la cual garantiza en buena forma que dicho bien cumple con los niveles de idoneidad necesarios para su circulación y para este caso la moto en la que se movilizaban los señores Dorado Y Narváez no contaba con dicho certificado, finalmente y no menos importante, encontramos que el Código Nacional de Tránsito y Transporte, obliga a que las motocicletas deban circular a máximo un metro de distancia entre la acera u orilla, elemento que como se puede identificar en el croquis e informe aportado al expediente el punto de impacto fue mucho más alejado del permitido para el tránsito de estos vehículos y que en ultimas fue el elemento determinante para que terminaran colisionando con la parte posterior del tracto-camión, de lo dicho, es evidente que fueron los señores Dorado y Narváez quienes aun conociendo los riesgos que se generaban al acudir a la vía pública obviando tantas medidas de seguridad normativamente establecidas, asumieron dichos riesgos y emprendieron el viaje, viaje que determinó la puesta en peligro de los múltiples actores viales que concurren a la vía pública y que en este caso por fortuna no determinó lesiones para terceros sino en exclusiva para arriesgados motociclistas.

6.- INNOMINADA:

Deriva de aquellos hechos que resulten probados en el proceso y que no hayan sido por vía de excepción directamente alegados, pero que, de denotarse y demostrarse conforme al acervo probatorio, deben ser declarados por el Juzgador de conocimiento.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

Conforme al Artículo 282 CGP “... Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada. Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.”

OBJECION A LA CUANTIA.

En el presente asunto conforme a las pretensiones presentadas estas son pedimentos que desbordan los montos lógicos cuantificables y calificables para la realidad de lo ocurrido y los elementos de juicio pruebas aportados; en este caso el accionante reclama condenas en cuantías más que exageradas a las que pudiere tener derecho, por ende se OBJETA LA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES, y se ruega no se tengan las mismas a efectos de aceptarlas o darles trámite como prueba y sustento de lo pretendido.

El juramento estimatorio y la fijación de la cuantía de los perjuicios, a partir del 2010 su cobertura se dimensiona a toda reclamación por concepto de perjuicios, mejoras, compensaciones y frutos, lo cual es predicable para procesos de naturaleza civil, contractual o extracontractual, e incluso para procesos en otras jurisdicciones, y esta debe ser ponderada, objetivada es decir relacionada con el hecho en sí y lo que derive del mismo de manera concreta y cierta. Al caso la tasación no se atiene a los reales elementos que de lo ocurrido y de lo pretendido se debe observar mínimamente.

No encontramos elementos de transparencia y lealtad en el reclamo que se hace en beneficio del demandante en nuestro leal saber y parecer, donde al fijar los elevados montos solicitados en unas sumas concretas en valor, pero etéreas en prueba, desestimamos el juramento, salvo que se pruebe si hay lugar a ello, lo cual no creemos, y conforme a ello, y así lo pedimos, se va comprobar o al menos no se



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

podrá probar, que la cuantía estimada en la demanda resultará como alegamos es desproporcionada por exceder el porcentaje indicado en la norma, en las directrices jurisprudenciales actuales, donde el peticionario no actuó conforme a principios de lealtad y buena fe en su reclamo, conducta que se reflejará las consecuencias sancionatorias pecuniarias que la ley procesal contrae para ello, y que deberán ser ordenadas por el Juez, además de ello, no se encuentran legitimados para actuar varios de los demandantes elementos que hacen improcedente la fijación de los perjuicios y condenas solicitadas en la demanda.

Sustento el pedimento en artículo 206 del Código General del Proceso (CGP) y demás normas aplicables a esta objeción a la cuantía.

Ruego al señor Juez considerar que la estimación de cuantía está anclada en la desproporcionalidad, donde para la parte demandada la prueba de ello se basará en el resultado objetivo de las que se aportan y las que se acopien en este proceso, ya que las cuantías pretendidas son especulativas a saber:

LUCRO CESANTE ACTUAL DEL PETENTE: No hay prueba de ingreso, y se desconoce el factor potencial de días por liquidar. No tiene contexto real efectivo, como ya se ha mencionado en suficiencia, es preciso la aportación de los perjuicios causados, en este caso preciso la necesidad de determinar los valores aplicables para la estimación del salario, se aporta una certificación de ingresos por concepto de salario en razón a la realización de trabajos de mantenimiento de la vía panamericana, pero esta acreditación salarial es expedida por una de las personas que se pretenden víctimas, elemento que define la conjugación de interés entre quien expide la certificación y quien reclama de él mismo su beneficio. Estos elementos obviados en la demanda para definición de un valor de ingreso, por tal razón no puede ser estimado el lucro cesante propuesto como un factor aplicable.

LUCRO CESANTE FUTURO DEL PETENTE: No hay prueba de ingreso, menos del daño real y efectivo que se alega, No tiene contexto real efectivo, igualmente se cae de nuevo en la necesidad de identificar los factores numéricos aplicables, en el entendido de que igualmente se acude a certificación de salarios por una de las mismas víctimas, existiendo otros mecanismos probatorios para definir el ingreso y que garantizan la transparencia de su contenido y permiten identificar los valores ciertos devengados por los accidentados.

A LOS MORALES: exceden abiertamente los parámetros jurisprudenciales de tasación, en el expediente no reposa prueba ni siquiera sumaria de la existencia de los perjuicios de las víctimas indirectas, padres, hermanos, abuelos, tíos y familiares. Se predica la existencia de perjuicios de salud y mentales, pero estos criterios son medicamente probables, determinables, pero en este caso se dejan a



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

una presunción legal, presunción ligada exclusivamente a la relación familiar. Conforme a los postulados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado corresponde al Juez que conoce la identificación de los valores presuntivos, pero teniendo como criterios de identificación factores claros de ingresos y afectación real, es decir no se puede dejar en el aire, sino que deben asentarse con criterio sustentables, y para este caso no encontramos ningún criterio aceptable que justifique los perjuicios alegados. No se acepta.

Por lo anterior resultan claros los siguientes parámetros de oposición a la cuantía desarrollada en la demanda y al juramento estimatorio.

1. No hay prueba de los perjuicios pretendidos para los demandantes, o de que se configure una incapacidad permanente o menoscabo a los parámetros de vida pedidos.

2. En lo que respecta al lucro cesante consolidado y futuro, no se aportó prueba que permita el reconocimiento de este por una institución registrada o siquiera prueba sumaria de su existencia por tal razón la determinación para su liquidación y tasación debe ser **CERO (0)**.

3. Atendiendo a que la tasación de los daños morales y la vida en relación corresponde a la facultad decisoria del señor juez, basado en las directrices de la Sana Critica, estos deberán ser llevados a los valores que resulten probados en el presente asunto.

Está probado el obrar Negligente y directo en la estimación de los daños y perjuicios por parte del Demandado, por lo cual pedimos se apliquen las sanciones de ley.

El valor de cuantía para la parte demandada, no puede calcularse ya que no tiene elementos ciertos y aceptados para ello.

Elemento especial de oposición, se establece en el PERJUICIO MATERIAL, LUCROS CESANTES PRESENTE Y PASADO, tomando como base DOS MILLONES DE PESOS M.CTE (\$2.000.000), sin prueba efectiva alguna, cuando para ello la jurisprudencia ha fijado como elemento preciso el SALARIO MENSUAL MINIMO VIGENTE, que para el día de los hechos, equivalía a la suma de \$737.717

Así lo valores introducidos en la fórmula para ambos perjuicios tomando como factor Ra es errado. Y debe por ende aceptarse a sus efectos la presente objeción.



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

En adelante aplica no solo para el calculo a favor de la demandante que alega ser la esposa, sino a los demás relacionados, incluidos los denominados **PARIENTES DE CRIANZA**.

A LA PRUEBAS SOLICITADAS:

Nos oponemos a las pruebas solicitadas por la parte demandante y solicitamos la contradicción de cada una de ellas en el momento procesal para ellos estipulado.

PRUEBAS QUE SE PIDEN:

1-. INTERROGATORIO DE PARTE AL DEMANDANTE Y DEMANDADA

En el momento procesal pertinente solicito se cite al demandado

- ANDRÉS FELIPE ORTEGA
- JESÚS ORLANDO ARCOS NARVÁEZ

Y a los demandantes en su orden:

- LUZ MILA DORADO GOMEZ
- GUSTAVO ADOLFO DORADO DORADO
- ANA CRISTINA DORADO DORADO
- JESUS MARIA DORADO NARVÁEZ
- MYRIAM DORADO CABRERA
- ADRIANA DORADO CABRERA
- SARA DORADO CABRERA
- MARIA NELLY DORADO CABRERA
- MARIA BETTY DORADO CABRERA
- ANGELICA LEIDA DORADO DORADO
- GLORIA ISABEL FRANCO
- LUIS MIGUEL MUÑOZ
- JORGE ELIECER NARVÁEZ
- JHONIER DANILO NARVÁEZ M
- ANGIE LIZET NARVÁEZ M
- MARIA ELENA GAVIRIA REALPE
- JORGE LUIS NARVÁEZ
- MOISES NARVÁEZ
- MARELIN NARVAEZ H
- MARIA DEL CARMEN LOPEZ H



JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO

ABOGADO – ASESOR EMPRESARIAL

Carrera 10 No. 34N- 20 Of. 101

Edificio Barcelona

Teléfono: (0928) 8353325 315-482-1573

e-mail: asesorsurapopayan@gmail.com

jcg.asesorjuridico@gmail.com

Para que en la fecha determinada por el despacho contesten las preguntas que de manera verbal o escrita realizaré.

AL PROCESO CUANTÍA Y COMPETENCIA.

El proceso es el señalado por la Ley y el despacho; me opongo a la cuantía tal como ya se ha expresado y ruego se dé trámite.

NOTIFICACIONES.

Mis mandantes serán notificados en la Avenida los industriales, Carrera 48 # 26 – 85, Torre Sur Piso 9D Medellín Antioquia.

Correo electrónico: notificacijudicial@bancolombia.com.co

Las personales las recibiré en su Despacho o en mi oficina de Abogado ubicada en la Carrera 10 N.o 34n-20 edificio Barcelona oficina 101, Teléfono 8353325 celular 3145519902.

Pido se me notifique adicionalmente al CORREO: asesorsurapopayan@gmail.com

Las de las demás partes ya obran en el proceso.

Con el debido respecto, suscribo.

JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO
TP. 68.937 C.S.J.
CC 14.889.980 de Buga.